

Inoperatividad práctica del RAMINP tras la entrada en vigor de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación de impacto ambiental de la Comunidad de Madrid

El Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (en adelante, RAMINP), aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, otorga básicamente y a grandes rasgos, dos tipos de licencias o autorizaciones: la llamada por la doctrina licencia de apertura, es decir, de instalación o establecimiento de la actividad, y una vez obtenida ésta, previa la comprobación correspondiente, se concede la segunda, también considerada por la doctrina a los solos efectos didácticos como licencia de funcionamiento o de ejercicio de la actividad.

A estos dos tipos de licencia se refiere el RAMINP en su Capítulo Primero del Título II, artículo 29 y siguientes.

Efectivamente, el artículo 29 dispone lo siguiente:

«Al solicitar la licencia municipal exigida por la legislación de Régimen Local si se trata de establecer una actividad que pueda estar comprendida en este reglamento, y, en todo caso, que figure en el Nomenclátor adjunto, se presentará por triplicado la instancia dirigida al Alcalde correspondiente y la siguiente documentación...»

El artículo 30 y siguientes se refieren a la tramitación municipal de la misma, que no merecen mayor comentario en lo que al presente caso respecta.

No obstante, el artículo 34 se refiere ya a los trámites que anteceden a la concesión de la segunda licencia al disponer que *«obtenida la licencia de instalación de una actividad calificada como molesta, insalubre, nociva o peligrosa, no podrá comenzar a ejercerse, sin que antes se gire la oportuna visita de comprobación por el funcionario técnico competente...»*.

Y, por último, el artículo 37 termina diciendo que *«el Alcalde, previos los Informes correspondientes, otorgará o denegará la concesión de esta licencia de ejercicio de actividad»*.

* Letrada de la Comunidad de Madrid.

Por lo tanto, y a la vista de los preceptos anteriormente transcritos del RAMINP, el esquema de concesión de autorizaciones o licencias para poder llevar a cabo las actividades o industrias calificadas en el mismo como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, sería el siguiente:

- Primero: concesión de licencia municipal de establecimiento de actividad (de apertura).
- Segundo: giro de la oportuna visita de comprobación por el funcionario técnico competente, como requisito previo al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
- Tercero: concesión de licencia municipal de funcionamiento o ejercicio de la actividad.

En este sentido, en el terreno práctico, pongamos el caso de la licencia municipal para el ejercicio de cualquier actividad comprendida en la Reglamentación de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en concreto, para la actividad específica de «desguace y chatarrería», concedida a una empresa XXX, S. A., el día 22 de febrero de 1999.

Se sitúa, según el esquema anterior, en la tercera fase de concesión de estas licencias y adquiere, en consecuencia, la denominación de licencia municipal de funcionamiento o ejercicio de la actividad, que sólo se otorga, como ha quedado expuesto, previa la obtención de la licencia de apertura y habiéndose efectuado la comprobación oportuna.

Una vez sentado lo anterior, tema aparte y diferente lo constituye el hecho de que determinadas actividades deban someterse a procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con lo establecido en la legislación de la Comunidad de Madrid aplicable en la materia, en el ejercicio de la competencia estatutariamente atribuida de dictar normas adicionales de protección.

Son, por tanto, dos temas distintos, pero que la legislación comunitaria ha conectado, toda vez que regula esos procedimientos de evaluación ambiental de tal forma que supedita la concesión de esas licencias municipales del RAMINP a la existencia de la resolución que pone fin al procedimiento de que se trate.

Así lo exigía la actualmente derogada Ley 10/1991 y lo exige también la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, que la dejó sin vigor.

En particular, y volviendo al ejemplo anteriormente expuesto, la actividad que nos ocupa, desguace y chatarrería, venía sometida por la Ley 10/1991 al procedimiento de calificación ambiental.

A este procedimiento le resulta de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en las normas de Derecho Transitorio de la nueva Ley 2/2002, el régimen jurídico de esta Ley 10/1991, si se encontraba en trámite a la entrada en vigor de la Ley 2/2002 (es decir, el día siguiente al 24 de julio de 2002, según su Disposición Final Quinta).

En otro caso, se sujeta directamente a los procedimientos contemplados en la Ley 2/2002 si figura en sus Anexos.

En el supuesto que nos ocupa, la determinación de la sujeción de esta actividad exigiría un estudio detallado del caso, toda vez que se circunscribe en el Anexo IV, apartado 62, de la Ley 2/2002.

A mayor abundamiento, el RAMINP ha dejado de ser operativo, tras la entrada en vigor de esta Ley 2/2002.

Los preceptos de la Ley 2/2002 que sirven de argumento jurídico a lo anteriormente expuesto son los siguientes:

★ El artículo 36, relativo al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, es del tenor literal siguiente:

«1. La Declaración de Impacto Ambiental favorable constituye requisito previo e indispensable para el otorgamiento de cualquiera de las autorizaciones o licencias que los proyectos o actividades sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental precisen para su ejecución, siendo, asimismo, el contenido de dicha Declaración de Impacto Ambiental vinculante para tales autorizaciones o licencias.

2. Las licencias o autorizaciones otorgadas contraviniendo lo dispuesto en el apartado anterior serán nulas de pleno derecho.»

★ El correlativo artículo 47, referido esta vez al procedimiento de Evaluación Ambiental se manifiesta en el mismo sentido cuando en su apartado 4.º dispone lo siguiente:

«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley, el Informe de Evaluación Ambiental de Actividades favorable será un requisito previo e indispensable para la concesión de cualquier licencia municipal relacionada con el proyecto o actividad en cuestión, siendo, asimismo, el contenido de dicho Informe vinculante para tales licencias.

5. Las licencias municipales otorgadas contraviniendo lo dispuesto en el apartado anterior serán nulas de pleno derecho.»

★ El Anexo IV, referido a Proyectos y Actividades a estudiar caso por caso por el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid, incluye los siguientes:

Gestión de residuos.

60. Instalaciones destinadas a la valorización o eliminación de residuos no incluidas en otros epígrafes.

61. Instalaciones para el almacenamiento, clasificación, trituración, compactación y operaciones similares con residuos peligrosos y no peligrosos.

62. Almacenamiento de chatarra, incluidos vehículos desechados.

★ Y por si el apartado anterior no fuera suficientemente meritorio, el Anexo V, apartado 26, no perdona:

ANEXO V.

ACTIVIDADES O PROYECTOS CON INCIDENCIA AMBIENTAL SOMETIDOS AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

26. *Todas aquellas actividades establecidas en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, cuando no estén recogidas en otros anexos de esta Ley.*

★ En cuanto a las normas de Disposición Transitoria de la Ley 2/2002, la Disposición Transitoria Primera, bajo la rúbrica «Régimen transitorio de los procedimientos de Evaluación Ambiental», establece:

«1. Los procedimientos que, a la entrada en vigor de esta Ley, se encuentren en tramitación continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento en que se iniciaron.»

★ La Disposición Adicional Cuarta de la mencionada Ley, bajo la rúbrica «Inaplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas», añade:

«A la entrada en vigor de esta Ley, quedará sin aplicación directa, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.»

Por otra parte, el Anexo III, en su apartado 49 de la ya derogada Ley 10/1991, sometía la actividad de almacenamiento de chatarra y desguace de vehículos al procedimiento de calificación ambiental y su artículo 10.2 era tajante al disponer que *«la Calificación Ambiental determinará la conveniencia o no de otorgar las licencias de apertura de actividades industriales y mercantiles, tanto públicas como privadas»*.

En consecuencia, y siguiendo el hilo conductor del caso práctico enunciado, este desfase entre la vieja legislación y la nueva sienta un precedente, extrapolable a cualquier otro supuesto en el que concurran idénticas o similares circunstancias, caracterizado por lo siguiente:

- Una licencia municipal concedida el día 22 de febrero de 1999 a la empresa XXX, S. A., es una licencia de funcionamiento o ejercicio de la actividad contemplada en el RAMINP, que no exime en absoluto a dicha empresa de la obligación de someterse a los procedimientos de evaluación ambiental previstos en la legislación de la Comunidad de Madrid.
- Se da la circunstancia de que esta actividad estaba sujeta al procedimiento de Calificación Ambiental contemplado en la hoy derogada Ley 10/1991.
- Si se inició dicho procedimiento conforme a la Ley 10/1991 y todavía continuaba su tramitación a la entrada en vigor de la Ley 2/2002, a pesar de la derogación expresa que hace la segunda de la primera, continúa rigiéndose el expediente por la Ley 10/1991, por aplicación directa de las normas de Derecho Transitorio de la nueva Ley 2/2002. En este sentido, la resolución que pone fin al mismo ha de efectuarse con carácter previo al otorgamiento de la licencia, que si se concede

antes o durante la tramitación del procedimiento y no al final, una vez recaída la resolución mencionada, deviene nula de pleno derecho.

- Si no se llegó a iniciar procedimiento alguno durante la vigencia de la Ley 10/1991, a la entrada en vigor de la Ley 2/2002, esta actividad se sujeta a los procedimientos en ella establecidos y la licencia municipal del 99 carece total y absolutamente de eficacia, por los mismos motivos que los expresados en la afirmación anterior, toda vez que la nueva legislación, como no podía ser menos, toma el relevo de la anterior.

La necesidad de exponer el supuesto práctico tiene su fundamento en el hecho de que, de esta forma y examinando caso por caso al producirse, se concluye que, actualmente y tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se produce lo que en Derecho se podría denominar una derogación tácita de una vieja legislación —el RAMINP— por otra nueva posterior —la Ley 2/2002—, al dejar esta última, prácticamente sin efecto, las licencias municipales concedidas.